



**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D. C., veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

**MEDIDA CAUTELAR - ACCIÓN DE LESIVIDAD
EXPEDIENTE: 2021 00129 00**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP VS LUZ MARINA
CARDOZO NAVARRO**

Ingresa al Despacho la demanda interpuesta por la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL** en contra de la señora **LUZ MARINA CARDOZO NAVARRO** para resolver sobre la **MEDIDA CAUTELAR** presentada por el apoderado de la entidad accionante, previa referencia a los antecedentes y fundamentos de la medida:

I. ANTECEDENTES:

Medida Cautelar Solicitada: El apoderado de la parte actora sustentó la medida cautelar de carácter suspensivo en contra de la Resolución No. 3330 de 1990 *“Por la cual se reconoce una pensión de vejez”* y la Resolución No. 7091 del 2009 *“Por la cual se sustituye una pensión de vejez”*, al sostener que se calculó de manera errada los incrementos del IPC para los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 de la pensión base. Situación que en su consideración impacta la mesada pensional que percibe la accionante al ser reconocido en su momento en contravía de la Ley 4 de 1976 y la Ley 100 de 1993.

Resalta que la indebida liquidación del IPC generó un detrimento de \$39.576.503. Que en los años 1996, 1997 Y 1998 se reconoció un IPC mayor al que debía otorgarse en los términos de la Ley 100 de 1993 y que en los años 1999, 2000 y 2001 se aplicó de manera indebida la Ley 445 de 1998, norma cuya correcta interpretación no debía generar diferencias a favor de la accionante.

Trámite de la Medida Cautelar: De la Medida cautelar se corrió traslado al señor **LUZ MARINA CARDOZO NAVARRO** mediante auto del 23 de abril de 2021 por el término de cinco (5) días hábiles en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., para lo cual se le realizó la notificación personal en su correo electrónicos el 28 de abril de 2021. La parte accionada guardo silencio durante el traslado de la medida cautelar, pronunciándose únicamente hasta el 10 de mayo de 2021 cuando este se encontraba agotado.

Para resolver se **CONSIDERA:**

De conformidad con el artículo 230 del C.P.A.C.A., las medidas cautelares dentro del proceso contencioso administrativo pueden ser de carácter; preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A., la cual se refieren a la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados y el respectivo restablecimiento del derecho. Sin embargo, para la adopción de dichas medidas se requiere del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma ibídem, la cual establece:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares.
*Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por **violación de las disposiciones invocadas** en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del **análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (...)*

Planteado lo anterior, se tiene que el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, condicionada a que el acto acusado contrarie de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, puesto que de requerirse un estudio de fondo, el juez debe

agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte la sentencia.¹

Así, uno de los requisitos exigidos en la norma aludida, es la sustentación expresa de la petición, aspecto que fue ratificado por el Consejo de Estado inclusive desde antes de la expedición de la nueva codificación contenciosa administrativa, como se observa en providencia de enero 23 de 2003, Consejero Ponente Doctor Mario Alario Méndez, Referencia: expediente 3069, donde se especifica:

“(...)Entonces, para sustentar la solicitud de suspensión provisional, han de indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación, de modo expreso, como es la exigencia legal. Ello significa que para el efecto no es bastante la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación que se haga en la demanda como fundamento de sus pretensiones. No. La sustentación de la solicitud de suspensión provisional se repite, ha de hacerse de modo expreso, porque es exigencia legal.

Cabe señalar, sin embargo, como se ha explicado muchas veces, que el requisito de sustentar de modo expreso la solicitud de suspensión provisional se satisface con la remisión que se haga en la solicitud al capítulo de la demanda concerniente a las normas violadas y al concepto de la violación, criterio que en esta ocasión se reitera. Siendo, pues, que el demandante para el efecto se remitió a las normas legales citadas y al concepto de violación explicado en la demanda, debe entenderse cumplido el requisito legal(...)”²

Bajo los presupuestos enunciados, se resolverá la medida cautelar de carácter suspensión en contra de la Resolución No. 3330 de 1990 “*Por la cual se reconoce una pensión de vejez*” y la Resolución No. 7091 del 2009 “*Por la cual se sustituye una pensión de vejez*”, al sostener que se calculó de manera errada los incrementos del IPC para los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 de la pensión base. Situación que en su consideración impacta la mesada pensional que percibe la accionante al ser reconocido en su momento en contravía de la Ley 4 de 1976 y la Ley 100 de 1993.

El apoderado de la parte actora sostiene que el acto acusado fue expedido de manera errada al existir una indebida interpretación del IPC sobre los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, incrementos que en su momento efectuó la extinta CAJANAL, por un lado por aplicar un valor superior y por otro por realizar una incorrecta interpretación de la Ley 445 de 1998, que arrojó un valor mayor.

Pese a la descripción del apoderado de la entidad, no se indica con claridad la razón y/o motivo de la indebida contabilización del incremento del IPC. Frente a los años 1996, 1997, 1998, el apoderado de la entidad no allegó certificados de como se

¹ Consejo de Estado, Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alíer Eduardo Hernández Enríquez

² Consejo de Estado, sentencia del veintitrés (23) de enero de dos mil tres (2003), exp: 3069. M.P.: Mario Alario Méndez.

aplicó la variación porcentual que permitan establecer a este Despacho de manera clara la diferencia agregada.

Frente a los años 1999, 2000 y 2001, se debe recordar que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en auto No. 1270 del 23 de mayo del 2000, con ponencia del Consejero Luis Camilo Osorio Isaza, estudió la legalidad del incremento realizado por la Ley 445 de 1998. Recordando que la norma había superado el juicio de constitucionalidad por violación del derecho a la igualdad al establecer un incremento inflacionario mayor, a saber:

"no existe vulneración alguna al principio constitucional de la igualdad, por el hecho de que se establezcan por la ley diferentes regímenes jurídicos en materia pensional aún dentro del mismo sector atendiendo razones justificadas, pues no sólo el tratamiento diferencial basado en el distinto origen de los recursos destinados al pago de las pensiones y reajustes a que alude la norma acusada está razonable y objetivamente justificado, sino que además el legislador está habilitado constitucionalmente, dentro de ciertos límites para determinar el monto y los alcances de los reajustes e incrementos pensionales, para lo cual debe tener en cuenta que los recursos económicos para satisfacer esos pagos son limitados"(C-067 de 1999).

Por lo que el juicio de legalidad debe centrarse no en el incremento efectuado por dicha Ley, sino en la forma en la que se calculó, monto que no fue explicado por la entidad accionada y que no es posible extraer para este despacho de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta, sin agotar el debido estudio probatorio y el análisis del expediente administrativo del causante de la pensión; situación que igualmente exigible para determinar los incrementos de 1996 a 1998. En este caso no bastó la indicación de las normas violadas debió realizarse una explicación mucho mayor que permitiera a simple vista avizorar la irregularidad pretendida.

A todo ello se debe agregar que, la entidad accionante solicita la suspensión de la Resolución 3330 de 1990, argumentando que existieron irregularidades en las variaciones del IPC de los 1996 a 2001, situación que acontece después de la expedición del acto administrativo y que no tendrían la capacidad de modificar una corrección efectuada con posterioridad a la expedición del acto acusado.

En este sentido y siendo que la medida cautelar solicitada no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 230 y 231 del C.P.A.C.A. EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

II. RESUELVE:

PRIMERO: SE NIEGA la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SE DECLARA presentada en término la contestación de la demanda y **SE RECONOCE** personería jurídica para actuar en calidad de apoderada principal de la parte accionada al **Dr. ALBEIRO FERNÁNDEZ OCHOA** identificado con la CC. No. 98.627.109 y la T.P No. 96.446 del C.S.J, de conformidad con el poder allegado de manera electrónica el 10 de mayo de 2021, el cual cumple con los requisitos del artículo 74 del C.G.P en concordancia con el Decreto Legislativo 806 de 2020.

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes de conformidad con lo establecido en el Artículo 205 del C.P.A.C.A en concordancia con lo establecido en los artículo 8 y 9 del Decreto Legislativo 806 del 2020, a los correos, fernandezochaabogados@hotmail.com, notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co; wlozano@ugpp.gov.co y en los correos oficiales de las entidades.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

FCS